

PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN ENCUESTA BICENTENARIO UC: ANÁLISIS COMPARADO 2011-2021

- En este informe comparamos cinco categorías analíticas del período 2011-2012 con la encuesta del 2021, estas son: expectativas sobre el país a 10 años, percepción de conflicto, confianza en las instituciones públicas, rol del Estado y las personas frente al propio bienestar y la violencia.
- No son auspiciosos los resultados comparados del estudio de la Universidad Católica. Se observa una sociedad pesimista, alarmada por la violencia que puede destruir el orden institucional, y conflictuada, en que se profundizan las divisiones entre distintos grupos y actores institucionales con signos claros de que las viejas teorías de lucha de clase han permeado en el último tiempo. También se observa una desconfianza generalizada en las instituciones públicas y, finalmente, un cambio cultural profundo respecto a la valoración de la responsabilidad personal y del Estado en la tarea de alcanzar el bienestar.
- Este cuadro complejiza el ejercicio del poder del próximo Gobierno, sobre todo porque parte de este cambio cultural y de crítica a la institucionalidad vigente ha sido levantado por los mismos líderes que lo conformarán.

Chile ha vivido importantes procesos políticos, sociales y económicos en la última década, los que van desde la llegada al poder, por primera vez desde el regreso a la democracia, de un gobierno de centroderecha; una prolongada coyuntura de conflicto social generalizado, que encuentra un climax en octubre de 2019, sin perjuicio de los hechos de violencia que hace años ocurren en La Araucanía, hasta una pandemia con significativas consecuencias sanitarias, psicológicas y económicas sufridas por la población del país.

Para comprender estos procesos de cambio vividos en Chile, y con el objetivo de analizar las variables que inciden en cómo ha evolucionado la cohesión o el conflicto y cómo se puede avanzar en la recomposición del tejido social, a fin de no seguir incrementando el espiral de división y violencia, hemos analizado la información de

la Encuesta Bicentenario 2011¹ y 2012² para contrastarla con los resultados obtenidos en la misma medición del año 2021³.

La última versión de la encuesta realizada por la Universidad Católica da cuenta de un cambio significativo de la percepción de la ciudadanía respecto al futuro del país, el rol del Estado y de las personas frente a su propio bienestar, la violencia y los niveles de conflictividad, entre otros.

La comparación de la información sobre los temas antes descritos nos permite evaluar los cambios en la percepción que los chilenos hemos tenido en un período relevante de la historia del país. Para estos efectos, comparamos cinco categorías analíticas del período 2011-2012 con la encuesta del 2021, estas son: expectativas sobre el país a 10 años, percepción de conflicto, confianza en las instituciones públicas, rol del Estado y las personas frente al propio bienestar y la violencia.

PERÍODO 2011-2012

Durante la primera Presidencia de Sebastián Piñera y en un contexto de post-terremoto, a partir del último trimestre de 2010 se viven sucesivas y crecientes protestas sociales relacionadas principalmente con reivindicaciones en materias de medioambiente, educación, además de profundos conflictos en específico en las regiones de Magallanes y Aysén, y de expresiones similares en Calama, Freirina, Rapa Nui y la ya siempre presente tensión en La Araucanía.

La encuesta de la Universidad Católica explora la percepción de la ciudadanía en distintas materias. En cuanto a las expectativas, un rasgo relevante identificado en 2011 lo constituyó la alta percepción favorable respecto a la afirmación de que Chile sería un país desarrollado en 10 años (55%), no obstante, en cuanto a la convivencia sólo un tercio de la población creía que avanzaríamos en ese período a una reconciliación como país (33%). También se observó entonces una baja percepción respecto a la capacidad de eliminar la pobreza en 10 años (35%).

El 2011, los entrevistados percibían mayoritariamente un altísimo nivel de conflicto a nivel nacional en todas las dimensiones estudiadas (relación Mapuches-Estado; Gobierno-Oposición; Trabajadores-Empresarios y Ricos-Pobres). Esta percepción

¹ <https://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2015/12/Resultados-Encuesta-2011.pdf>

² <https://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2015/12/Resultados-Encuesta-2012.pdf>

³ https://politicaspUBLICAS.uc.cl/wp-content/uploads/2022/01/Encuesta-Bicentenario-2021-versio%CC%81n-final_OK-1.pdf

variaba desde el 78% al 55%, siendo la más alta la relación Mapuche-Estado y la más baja, la de Ricos-Pobres.

La confianza de las personas en las instituciones políticas es una de las variables más estudiadas a nivel sociológico, dada su relevancia al momento de buscar explicaciones frente a situaciones de conflicto social. **La confianza de los ciudadanos en sus instituciones es clave para la estabilidad del sistema democrático y para comprender situaciones de crisis social o política.**

En cuanto a las instituciones públicas, la encuesta de 2011 registró un porcentaje muy bajo de personas que valoraba con mucha o bastante confianza a las instituciones, siendo la excepción las FF.AA., las cuales recibieron el mayor apoyo (49%). El resto de las instituciones evaluadas presentaron una baja confianza: gobierno (15%), los partidos políticos (4%) y el Parlamento (3%).

En relación con el rol del Estado y las personas frente al bienestar, se observó en 2011 una clara disposición positiva respecto a la responsabilidad que deben tener las personas sobre su propio bienestar (40%) versus aquellos que creían que el Estado es el responsable del bienestar de las personas (29%). Esta opinión tenía su correlato en el altísimo porcentaje (43%) que creía que la ayuda del Estado debía ser focalizada en los más pobres y vulnerables. En cuanto a la educación y el trabajo, los entrevistados consideraban mayoritariamente (41%) que es el Estado el que debía dar garantías de una buena calidad para efecto de que las personas puedan progresar en la vida.

En cuanto a la violencia, mayoritariamente se reconocía el problema (58%) y los entrevistados consideraban que se le debía dar importancia, porque amenazaba con destruir el orden institucional. El 25,3% justificaba la violencia cuando se trataba de minorías indígenas que reclaman tierras ancestrales; trabajadores que buscan mejores salarios; comunidades que defienden su entorno; y comunidades que buscan mejores condiciones de vida. En promedio, el 41,7% de los entrevistados consideraba que, frente a los saqueos, las barricadas y las manifestaciones no autorizadas, se debía hacer uso de la fuerza pública. El apoyo a la acción policial frente a los saqueos era fuerte, aunque menor frente al uso de la fuerza ante manifestaciones públicas no autorizadas. Finalmente, el 68% consideraba que se debían prohibir las manifestaciones de grupos radicales.

Si bien las encuestas del 2011/2012 mostraban una preocupación mayoritaria sobre el tema de la violencia, también se registraba un bajo porcentaje de aquellos que la justificaban en casos de conflictividad social. El apoyo del uso de la fuerza pública

para contrarrestar la violencia y el altísimo porcentaje de personas que creía que se debían prohibir las manifestaciones a grupos radicales, señalaba entonces una posición coherente con la defensa del Estado de Derecho por parte de la mayoría de los entrevistados.

AÑO 2021

La Encuesta Bicentenario, cuyo trabajo en terreno se realizó entre septiembre y noviembre de 2021, se llevó a cabo en medio de un ambiente altamente tensionado por los sucesivos procesos electorales y, sobre todo, por la campaña presidencial de primera vuelta.

Al comparar con el periodo de análisis anterior, se observa que las expectativas son significativamente menores en dos de las tres variables estudiadas: posibilidades de ser un país desarrollado y reconciliado. En el primer caso, la caída es del 55% al 40% y en el caso de la reconciliación del 33% al 27%. En cuanto a la eliminación de la pobreza, la disminución es menor de 35% a 32%. Claramente estamos frente a una ciudadanía más pesimista, donde la población comienza a perder las esperanzas de cambio en variables tan significativas como son la pobreza, desarrollo y la capacidad de alcanzar acuerdos para superar conflictos y así recobrar las relaciones positivas al interior de la sociedad.

Coherente con la disminución de la percepción de la capacidad de reconciliación del país, los entrevistados después de una década, consideran que existe “un gran conflicto” en las diferentes dimensiones estudiadas y que esta situación de conflictividad se ha acentuado en el período de tiempo estudiado. La alta percepción de conflictividad en la relación Mapuche-Estado se incrementa de 78% a 88%; Gobierno-Oposición 77% a 79%; Ricos-Pobres 55% a 71%; y en el caso de la relación Trabajadores-Empresarios, ésta prácticamente se mantiene con un 63%. Una sociedad con los altísimos niveles de conflictividad reconocidos por la población enfrenta un escenario complejo respecto de encontrar caminos de solución a las tensiones propias asociadas a los procesos de cambio que Chile está viviendo.

La confianza en las instituciones públicas no se recupera en el período estudiado, incluso instituciones como las FF.AA. que recibían un fuerte apoyo (49%) caen de forma significativa (20%). Llama la atención que nuevas instituciones, como la Convención Constitucional (16% de confianza) e instituciones tradicionales, tales como Tribunales de Justicia (6%) y Carabineros (17%), consideradas en esta evaluación, reciben una bajísima confianza ciudadana.

Las tres variables que miden la percepción de la ciudadanía respecto al rol del Estado y de las personas frente a su propio bienestar y, por lo tanto, la base de las estrategias de políticas públicas, muestran un cambio significativo si se compara la información de 2012 y 2021.

Este cambio de tendencia muestra un retroceso significativo de la valoración de la responsabilidad individual como factor de cambio asociado a su bienestar, pasando de una valoración del 40% al 27%. Como contramano, la responsabilidad del Estado en el bienestar de las personas se incrementó del 29% al 42%.

Asimismo, los entrevistados le asignan al Estado un rol mayor en cuanto a dar garantías en educación y trabajo, creciendo su apoyo del 41% al 47%.

El incremento de apoyo a la idea de que el Estado debe entregar ayudas universales pasó del 30% al 45%, lo que cierra una visión mucho más estatista respecto a posiciones de años anteriores en las cuales el esfuerzo personal recibía mayor valoración.

La evolución hacia políticas públicas más estatistas se complementa con el alto porcentaje de personas (62%) que cree que “Lo mejor para el país es que haya igualdad social y una distribución de los ingresos más equitativa”. Sobre esta última variable no tenemos punto de comparación en la encuesta de 2012.

La percepción de violencia se incrementó del 58% al 64%. En cuanto a la justificación a la violencia, cuando se trata de minorías indígenas que reclaman tierras ancestrales, trabajadores que buscan mejores salarios, comunidades que defienden su entorno y comunidades que buscan mejores condiciones de vida, el porcentaje que lo justifica disminuyó en promedio del 25,3% al 19,5%.

En comparación con la misma pregunta hecha en el año 2012, se redujo significativamente la justificación del uso de la fuerza pública cuando se producen saqueos, cuando se bloquean caminos o se levantan barricadas, o cuando se producen manifestaciones públicas no autorizadas, pasando de un 41,7% a un 23,2% en promedio para los cuatro indicadores. Mayoritariamente (58%) considera que se deben prohibir la realización de manifestaciones a grupos radicales, 10 puntos menos que el año 2012.

Al comparar las cifras de justificación de la violencia se percibe un cambio positivo, pero resulta paradójico que la población le quitó apoyo a la autoridad al momento de respaldar el uso de la fuerza pública contra esos actos de violencia.

COMENTARIOS FINALES

No son auspiciosos los resultados comparados del estudio de la Universidad Católica. Se observa una sociedad pesimista, alarmada por la violencia que puede destruir el orden institucional, y conflictuada, en que se profundizan las divisiones entre distintos grupos y actores institucionales con signos claros de que las viejas teorías de lucha de clase han permeado en el último tiempo. También se observa una desconfianza generalizada en las instituciones públicas y, finalmente, un cambio cultural profundo respecto a la valoración de la responsabilidad personal y del Estado en la tarea de alcanzar el bienestar.

Estos cinco hallazgos conforman un cuadro complejo para las autoridades que asumen a partir de marzo y con ello no nos referimos solo al nuevo Gobierno, sino que también al Congreso. Lo anterior va de la mano con el desempeño de la Convención Constitucional que tendrá que mostrar resultados a mediados de este año, los que serán sometidos al escrutinio público. Esta complejidad, que, entre otras cosas, tiene un fuerte componente de confianzas, no debe llevar a sucumbir a políticas estatista y universales. Se espera que las nuevas autoridades tomen decisiones que no ayuden a profundizar esa desconfianza y el descontento social. En esa línea y en un mundo de recursos escasos más importante se torna priorizar y hacer reformas con diagnósticos correctos y no basados en premisas sin fundamentos que se instalan en la discusión política.

Respecto a los cambios culturales observados, es importante despejar cuánto de este cambio está influido por las políticas públicas implementadas a partir de la pandemia y las ayudas del Estado que de ahí se desprenden, y/o por el discurso de la izquierda asociado a la violencia desplegada desde octubre de 2019.

Responder a las expectativas de una mayor presencia del Estado en materias sociales con apoyos universales -sobre todo cuando esa respuesta tampoco constituye la solución a los problemas y puede agravarlos-, lograr el reencuentro de los ciudadanos con las instituciones públicas, disminuir la violencia, avanzar en la reconciliación entre grupos y reencantar a los ciudadanos con la esperanza de alcanzar el desarrollo eliminando la pobreza, todo esto en un umbral de tiempo razonable, son objetivos complejos de ser alcanzados simultáneamente, con diagnósticos incorrectos en muchos casos y a través de reformas estructurales o refundacionales.

Este cuadro complejiza el ejercicio del poder del próximo Gobierno, sobre todo porque parte de este cambio cultural y de crítica a la institucionalidad vigente ha

sido levantado por los mismos líderes que lo conformarán. Se proyecta que liderazgos sin resultados en el corto o mediano plazo no serán suficientes al momento de responder a las expectativas ciudadanas. Más aún frente a una ciudadanía que idealiza con facilidad a las nuevas autoridades con la esperanza de que se resuelvan sus necesidades o aspiraciones.

Pero igualmente, el sector político de la derecha y centroderecha tendrá que reflexionar sobre la profundidad del cambio cultural, a fin de despejar por qué en esta última década los chilenos pasaron de valorar posiciones económicas y sociales cercanas a su pensamiento, a optar por las propuestas de la izquierda más cercanas a modelos latinoamericanos que no han mostrado éxitos en estas materias. Se deberá hacer un esfuerzo mayor por comprender los fundamentos que tienen aquellos encuestados que abogan por una mayor injerencia del Estado en el camino al desarrollo, como, asimismo, comprender las causas que llevaron a las personas a cambiar su opinión en esta última década.

ANEXO

Análisis comparado del perfil de los entrevistado según Encuesta Bicentenario UC 2021^{4 5}

Expectativas sobre Chile (10 años) %	2011	2021
Ser un país desarrollado	55	40
Ser un país reconciliado	33	27
Eliminar la pobreza	35	32

Percepción de conflicto (% gran conflicto)	2011	2021
Mapuche-Estado	78	88
Gobierno-oposición	77	79
Trabajadores-empresarios	63	62
Ricos-pobres	55	71

Confianza en las instituciones públicas (% mucha + bastante)	2011	2021
Gobierno	15	7
Partidos Políticos	4	5
Parlamentarios	3	4
Tribunales de Justicia	-	6
FFAA	49	20
Carabineros	-	17
Constituyente	-	16

Estado vs esfuerzo personal ⁶ (%)	2012	2021
Cada persona debería preocuparse y responsabilizarse por su propio bienestar	40	27
El Estado debería preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas	29	42
La ayuda del Estado debe destinarse sólo a los más pobres y vulnerables	43	32
Todos los ciudadanos deben recibir la misma ayuda del Estado	30	45

⁴ <https://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2015/12/Resultados-Encuesta-2011.pdf>

⁵ <https://encuestabicentenario.uc.cl/wp-content/uploads/2015/12/Resultados-Encuesta-2012.pdf>

⁶ https://politicaspUBLICAS.uc.cl/wp-content/uploads/2022/01/Encuesta-Bicentenario-2021-versio%CC%81n-final_OK-1.pdf

La mejor forma de progresar en la vida es esforzarse por emprender, capacitarse y trabajar duro	30	30
Para progresar en la vida se requieren garantías del Estado de buena educación y trabajo	41	47
Lo mejor para el país es que haya igualdad social y una distribución de los ingresos más equitativa	-	62
Lo mejor para el país es que haya crecimiento económico alto y sostenido	-	18

Violencia (%)	2011	2021
Existe violencia en el país y hay que darle mucha importancia porque amenaza con destruir el orden institucional	58	64
Se justifica el uso de la fuerza o la violencia en caso de reivindicación de tierras, mejores salarios, condiciones ambientales y condiciones de vida.*	25,3	19,5
Se justifica que el Estado haga uso de la fuerza pública en cada una de las siguientes situaciones (saqueos, barricadas, manifestaciones no autorizadas).**	41,7	23,2
Prohibición de realizar manifestaciones a grupos que favorecen la violencia	68	58

*Elaboración propia en base a cálculo promedio de los indicadores señalados.

** Elaboración propia en base a cálculo promedio de los indicadores señalados.